Políticas de drogas, regulación del cannabis y educación

María Cecilia Díaz

Introducción

La charla ocurrió en 990 Arte Club, lugar emblemático que vio nacer a la asociación cannábica Cogollos Córdoba a inicios del siglo XXI y fue también sede de sus reuniones semanales. Una tarde de 2015, antes de que comenzara la reunión, conversé con una integrante de la agrupación sobre los talleres que habían organizado a lo largo de los años. Durante mi trabajo de campo etnográfico, que implicó acompañar a activistas que buscaban la regulación integral del cannabis, había observado que el ofrecimiento de talleres era central en la agenda política de sus respectivas organizaciones; por ese motivo, me interesaba conocer qué impresiones y sentidos construían en torno a tales actividades. En esa conversación puntual, mi interlocutora recordó un taller centrado en cómo las personas usuarias podían hablar de la marihuana con sus hijos e hijas, y en cómo enseñarles formas *responsables* de relacionarse con las sustancias. El intercambio había sido pensado como una manera de *construir mejor información* a partir del libro Solo es una planta del artista y escritor Ricardo Cortés (2005).

En Argentina, la Ley N° 23.737, aprobada 1989, penaliza diversas conductas con relación a las drogas; entre ellas, la siembra, la comercialización y la tenencia de cannabis. Mientras tanto, la educación promovida desde el Estado en torno a estas sustancias se apoyaba en la

Ley N° 23.358 –aprobada unos años antes, en 1986, y actualizada en 2004 mediante la Ley N° 25895–, que establecía que los ciclos primario y secundario y los servicios de radio y televisión debían incorporar contenidos para la “prevención de la drogadicción”. Son ampliamente recordadas por quienes crecimos en la década del noventa las campañas de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (SEDRONAR) que tenían como protagonistas a Fleco y Male, dos dibujos animados caracterizados como adolescentes que conversaban con distintos funcionarios sobre los efectos, a menudo catastróficos, que los consumos de drogas podían ocasionar y, de ese modo, aprendían a decirles que no a las sustancias. Es posible ir rastreando el carácter preventivo de la legislación (Manzano, 2017) en la Ley N° 26586 de 2009, que establece un Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas,¹ y en el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos, aprobado en 2014, que prevé la creación de una red de centros habilitados para desarrollar charlas informativas en articulación con escuelas y clubes de sus respectivas zonas (Ley N° 26934, art. 7, inc. d).

Volviendo un poco hacia atrás, también durante la década del noventa comenzaron a expandirse redes y organizaciones de reducción de daños (RD) en el país. La RD abarca un conjunto amplio de acciones diseñadas según las particularidades de los contextos locales, que tiene como objetivo principal la evitación de las consecuencias perjudiciales derivadas del uso de drogas y no la oposición al uso en sí mismo, considerando en primera medida los derechos de las personas usuarias (Rhodes & Hedrich, 2010). Ante el predominio de mensajes abstencionistas que debían conducir a “la formación de opinión en torno a la gravedad que la drogadicción implica” (Ley N° 23.358, art. 4), el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil se constituyó, así, en un laboratorio donde se ensayaron y construyeron otras formas de transmitir conocimientos y modos de cuidado de sí con relación a las sustancias psicoactivantes ilegalizadas, entre las que se encuentra el cannabis.

En este capítulo nos valdremos de entrevistas en profundidad, observación participante y análisis documental para hacer un recorrido por iniciativas educativas que han puesto de relieve, de distintas maneras, las experiencias y los saberes de las personas usuarias. Aquí argumentamos

1 Mediante la resolución N°256/15, el Consejo Federal de Educación aprobó los “Lineamientos curriculares para la Prevención de las Adicciones” con el objetivo de implementar la ley en los niveles de enseñanza obligatoria.

que, a través de la acción de asociaciones civiles y redes, y de su vinculación intermitente con diferentes instituciones estatales, se produjeron capacitaciones e instancias de intervención social que jalonaron una historia particular de la educación en torno a las drogas.²

Capacitando para reducir daños

El enfoque de reducción de daños como forma de concebir y mirar la relación entre personas y drogas se fortaleció de manera global hacia fines del siglo XX a partir de la constatación de que el uso compartido de jeringas entre usuarios de drogas inyectables (UDI) aumentaba la transmisión del virus del VIH. Por ese motivo, las principales tareas consistieron en campañas y medidas profilácticas destinadas a las personas que no querían abandonar esa práctica (Rhodes & Hedrich 2010).

En Argentina, los datos del Programa Nacional de Sida del Ministerio de Salud permitieron establecer que una gran proporción de las personas viviendo con VIH/sida (PVVS) habían contraído el virus a través del uso inyectable (Kornblit et al. 2002). En ese contexto, la reducción de daños también comenzó a formar parte de las intervenciones realizadas por profesionales locales que trabajaban en el ámbito de los consumos problemáticos de sustancias (Camarotti, 2011). En tales acciones, las voces y los conocimientos de las personas usuarias se volvieron insumos fundamentales para el diseño y la implementación de técnicas y formas de trabajo con las comunidades.

Entre las iniciativas tempranas mejor documentadas se encuentra la que desarrolló la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA), una red formada en 1999 por profesionales del Centro de Estudios Avanzados en Drogadependencias y Sida (CEADS) de la Universidad Nacional de Rosario, el Centro Regional de Salud Mental Dr. Agudo Ávila de Rosario, y el Centro Carlos Gardel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con la nueva formación en red, sus objetivos en común ya no sólo apuntaban a disminuir los perjuicios asociados a los usos de drogas, sino también a incidir en la formulación e implementación de políticas socio-sanitarias en la materia y convocar a los propios usuarios, alentando su organización (Hurtado, 2002, p. 17).

2 El interés por las capacitaciones se deriva de las pesquisas realizadas y se inscribe en un proyecto de investigación dirigido por María Gabriela Lugones y María Lucía Tamagnini que enfoca la dimensión pedagógica de determinadas actuaciones estatalizadas.

Como narra el libro *Drogas: Haciendo posible lo imposible. Experiencia de Reducción de Daños en Argentina* (Inchaurraga et al., 2002), en el año 2000 se implementó el Programa de Reducción de Daños y Prevención del VIH/sida en Usuarios de Drogas de la ciudad de Rosario, gracias al financiamiento del Programa Lucha contra el Sida (LUSIDA), dependiente del Ministerio de Salud de la Nación. En su despliegue, el programa incluyó tareas en la calle –distribución de folletería, preservativos y kits de inyección–, talleres de reducción de daños y capacitaciones para la formación de promotores comunitarios. En cuanto a los talleres, estos ya se realizaban desde 1994 en el Centro Regional Dr. Agudo Ávila, que se caracterizaba, además, por brindar un servicio asistencial de bajo umbral de exigencia. En las experiencias registradas a partir del giro de siglo, se destaca que si bien los contenidos de cada encuentro se estructuraban según los grupos que participaban en cada ocasión –población general, usuarios de drogas en general y UDI–, las dinámicas de trabajo comunes eran teórico-prácticas y partían del reconocimiento del bagaje de los integrantes, ya sea para poner en valor sus saberes como también para discutir en torno a sus preconcepciones. Así, de acuerdo con el libro, “Los talleres se presentan como un espacio adecuado para que las motivaciones de los participantes se articulen con vivencias y reflexiones personales” (Inchaurraga et al., 2002, p. 84).

La capacitación para promotores emergía como una etapa posterior, dependiente de la selección de personas usuarias que habían participado en los espacios descritos. El objetivo era formarlas como agentes de salud que pudieran incorporar y difundir información acerca de un amplio abanico temático: estrategia de reducción de daños; modos de reducir daños en torno a la actividad sexual, al uso de drogas y la transmisión del VIH; situación legal a la que se enfrentan los usuarios de drogas en virtud de la Ley N° 23.737; situación epidemiológica del consumo en la ciudad de Rosario; estrategias para contactarse con otros usuarios y propagar las técnicas de cuidado aprendidas; herramientas de gestión para desarrollar proyectos de intervención propios (Inchaurraga et al., 2002, p. 90). En este sentido, es importante destacar el hecho de que las personas usuarias, una vez formadas, pudieran replicar talleres de reducción de daños en sus barrios o comunidades de pertenencia bajo la supervisión de los profesionales de la red. Asimismo, también difundían sus conocimientos en torno a las problemáticas legales y judiciales asociadas al consumo.

Experiencias educativas similares también han sido documentadas por Intercambios Asociación Civil, una organización que surge de

especialistas que se desempeñaban en el Fondo de Ayuda Toxicológica, en Buenos Aires, y que en los noventa habían comenzado a trabajar con la prevención de VIH entre personas usuarias de drogas sin saber que existía un enfoque llamado “reducción de daños”. Gracias a la participación en una conferencia mundial de sida, se encontraron con referentes de esa perspectiva y pudieron, además de comenzar a tejer redes, ponerle un nombre a las estrategias de intervención que estaban desarrollando. En 1995 fundaron la organización civil y en 1998 llegó la posibilidad contar con financiamiento de LUSIDA y de ONUSIDA para la implementación de proyectos; estos contemplaron actividades de investigación sobre prácticas de uso de drogas e intervenciones concretas, como el diseño de materiales preventivos destinados a personas usuarias y la entrega de jeringas. En 2003, en el marco del proyecto Prevención del Abuso de Drogas y del VIH/SIDA en los países del Cono Sur, llevaron a cabo un “entrenamiento de operadores/promotores de reducción de daños”, orientado a quienes realizaban trabajo de campo en programas de RD y habían sido capacitados en diferentes instituciones, desempeñándose sobre todo con personas usuarias por vía inyectable (Goltzman, 2004). En ese encuentro, compartieron saberes desde sus respectivos recorridos territoriales, modos de acción ante situaciones y problemáticas específicas, y estrategias para ampliar los alcances de las intervenciones hacia otros grupos como jóvenes y trabajadoras sexuales; en la multiplicación de las tareas de RD se preveía la realización de charlas y talleres (Goltzman, 2004, p. 35). A medida que los hábitos de consumo se modificaron –el uso de cocaína por vía inyectable disminuyó–, se desarrollaron programas de reducción de daños (PRD) que empezaron a atender cada vez más otras situaciones de vulnerabilidad social (Galante et al., 2009; Epele & Pecheny, 2007).

En Córdoba, 1995 también fue el año de conformación de Perspectiva Social, a partir de profesionales del campo del trabajo social que se desempeñaban en hospitales públicos y querían introducir una mirada comunitaria y no solo asistencial ante ciertas problemáticas. Hacia inicios del siglo XXI esta organización implementó intervenciones de reducción de daños con relación a uso de drogas y VIH, tanto en la ciudad de Córdoba como en localidades del interior de la provincia. Se trataba de proyectos que incluían campañas de prevención de VIH/sida, infecciones de transmisión sexual y adicciones en barrios periféricos de la ciudad, en localidades serranas durante el verano y en recitales masivos, además de testeos gratuitos y obras de teatro en la vía pública (Díaz, 2019). Para las actividades de capacitación, que consideraban fundamentales y a las que solían destinar los primeros tres meses de cada proyecto, contaron con talleres

que brindaron integrantes de ARDA, y también distribuyeron folletería de esa asociación; asimismo, estuvieron en contacto con Intercambios.

De las capacitaciones reseñadas interesa destacar, en primer lugar, la distinción y el trabajo colaborativo entre profesionales u operadores técnicos y operadores o promotores comunitarios. Mientras los primeros contaban con formación universitaria y configuraban una trayectoria de investigación en torno al paradigma, los segundos aportaban su experiencia personal como usuarios o exusuarios y sus conocimientos de redes barriales y circuitos de uso de sustancias psicoactivantes ilegales, fundamentales para extender las intervenciones en coordenadas concretas. Es en esas experiencias de formación que se produce su organización como Club de Usuarios en Rosario, en el año 2000, y luego como Red Argentina de Defensa de los Derechos de los Usuarios de Drogas (RADDUD). Como afirmaron desde su fundación:

Porque creemos firmemente que la prevención es posible y debe partir de la educación y no de la represión, valorando al sujeto y su capacidad de decidir responsablemente acerca del daño que pueden ocasionar las prácticas riesgosas para su salud y la de los otros. (Inchaurraga et al., 2002, p. 158)

Informando y enseñando sobre cultivo

Con el comienzo del nuevo siglo confluyeron las trayectorias de las personas usuarias de drogas que habían empezado a institucionalizar su organización, las que comenzaban a hacer uso terapéutico del cannabis como tratamiento para distintos padecimientos y quienes cultivaban y hacían uso recreativo de la planta. De ese encuentro surgieron figuras sociales específicas que, con el correr de los años, constituyeron un movimiento cannábico nacional y un modo de politización centrado en el accionamiento de y la adscripción a la categoría *usuario responsable* (Corbelle, 2016). La asociación Cogollos, que se conformó alrededor del 2001 y protagoniza el relato que abre el capítulo, fue la primera formación de este tipo.

Entre las actividades que componen la grilla anual de las agrupaciones, prácticamente desde sus inicios, podemos listar manifestaciones callejeras como la Marcha Mundial de la Marihuana –realizada el primer sábado de mayo de cada año– y, a partir de 2010, la Marcha Nacional de la Marihuana –llevada a cabo en noviembre–, como acontecimientos importantes que demandan grandes esfuerzos organizativos por su

despliegue y escala. Conforme pasaron los años y se fue estructurando el debate político, éstas fueron organizadas en torno a diversas consignas, siendo la despenalización, la sanción de una nueva ley de drogas, la regulación del cannabis para todos sus usos y la libertad de las personas presas por plantar algunas de las principales. En una escala menor, con mayor frecuencia, y de alguna manera ritmando los hitos mencionados, se encuentran los talleres, entre otros espacios de formación cuyo rol es clave para las asociaciones. Esto ocurre en dos sentidos principales: por un lado, permiten brindarle a la comunidad distintos conocimientos acerca de técnicas de cultivo y de cuidado de plantas y de sí, aprendidas en la agrupación y también en la dedicación cotidiana a la planta; por el otro, posibilitan abordar la propia práctica del cultivo como *autocultivo*, esto es, como modo de aprovisionamiento que garantiza el control de lo producido y la disminución de los potenciales daños que genera la marihuana adulterada proveniente del narcotráfico, evitando contribuir con esos circuitos. Al narrar sus historias de vida, los activistas, además, reconocen que las marchas y los talleres han sido fundamentales para formarse e informarse acerca del cultivo de cannabis y de la lucha política en torno a su regulación.

Los talleres relevados entre 2015 y 2017 revisten la particularidad de que fueron realizados en un periodo en el que el acceso a la planta para uso terapéutico ganó lugar en la agenda pública. En este contexto fue crucial la movilización política de madres de niños y niñas con encefalopatías graves que no encontraban una respuesta satisfactoria en la medicina convencional. Mientras tanto, las organizaciones cannábicas fueron los espacios a los que acudieron para solicitar información, asesoramiento y también las plantas y derivados que constituyeron su nueva opción terapéutica. En ese proceso, surgieron nuevas asociaciones que comenzaron a realizar acciones de incidencia política enfocadas en la regulación del acceso al *cannabis medicinal*. La politización de las madres y la sanción de leyes que apuntaban específicamente a ese tipo de uso fueron fenómenos que se presentaron en varios países de América Latina durante ese decenio (Rivera Vélez, 2019; Labiano, 2020). En Argentina, además, esto dio lugar a la conformación de redes híbridas, integradas por activistas de agrupaciones cannábicas de viejo cuño, personas usuarias terapéuticas, madres, legisladores y profesionales de la salud y de la ciencia que se vieron interpelados por la demanda social. Una de ellas se institucionalizó como Red de Cannabis de Uso Medicinal e Industrial del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Díaz, et al., 2021).

Como elemento en común, los talleres a los que nos referimos fueron organizados por asociaciones de Córdoba y realizados en sus respectivas sedes o en locales utilizados por otras asociaciones con las que tenían una relación estrecha. Los contenidos que se impartían eran pensados en su dimensión práctica y consistían en un conjunto de técnicas y procedimientos para llevar adelante experiencias de cultivo optimizando los recursos disponibles en cada hogar. Estos instrumentos habían sido desarrollados e implementados por las personas expositoras, que por su trayectoria gozaban del reconocimiento de los demás en tanto especialistas en ciertos procesos de cultivo específicos. Por lo tanto, los talleres no consistían en clases enteramente expositivas, sino en un segmento de exposición –con ayuda de recursos visuales como presentaciones digitales mediante diapositivas y elementos como frascos con sustrato o plantas aromáticas– seguido de un segmento de preguntas y respuestas en el que se esperaba la participación del público. La planificación se llevaba a cabo en las reuniones semanales de las asociaciones e incluía la invitación de los expositores, la definición de los contenidos y la dinámica del encuentro, el diseño de un folleto o *flyer* para redes sociales virtuales y también se preveía la toma de fotografías que luego circulaban por los mismos medios.³

Durante el trabajo de campo realizado se observaron dos tipos de talleres de cultivo: unos tuvieron como destinatarios principales a personas interesadas en cultivar para su propio aprovisionamiento, principalmente varones jóvenes. Así, los temas favorecidos eran, por ejemplo, los rudimentos del cultivo *indoor* –es decir, de interior–, presentando las características del ciclo de vida de la planta, los métodos de germinación disponibles y los recomendados, la composición ideal del sustrato en cada etapa y otras sugerencias para garantizar parámetros adecuados de temperatura, humedad, ventilación e iluminación. Además de la información para cultivadores principiantes, los talleres también podían ser espacios propicios para enseñar cómo realizar cortes en las plantas y obtener ejemplares de una misma variedad, cómo producir semillas por polinización controlada y evitar de plagas y patologías a través del cultivo de otras plantas. De hecho, en una de las reuniones de Cogollos –asociación responsable de este último taller– se discutió sobre la pertinencia de considerar las necesidades de las personas que querían profundizar en

3 Analicé los talleres de cultivo de la Asociación Comunidad Cannábica Córdoba y de la Asociación Civil Cogollos Córdoba en mi tesis de doctorado (Díaz, 2019) y en un trabajo de publicación reciente en el que abordo de manera exploratoria las iniciativas educativas sobre cannabis en la Argentina contemporánea (Díaz, 2023).

contenidos más *avanzados*. El otro tipo de taller se enfocaba en el nuevo público que había comenzado a demandar información sobre derivados de la planta: las personas usuarias terapéuticas, en su mayoría mujeres que acudían en busca de esa alternativa para sus hijos e hijas, y personas mayores. Los conocimientos presentados tendían, entonces, a priorizar aquellos aspectos considerados *básicos*, es decir, para iniciantes, y también la producción casera del extracto de cannabis para luego diluirlo y elaborar los llamados *aceites*. El vocabulario también se modificaba y ya no abundaba la jerga utilizada entre cultivadores, cuyo significado se daba por sentado entre pares.

En las experiencias reseñadas encontramos una intensificación de la importancia de las vivencias en primera persona a la hora de construir conocimientos sobre la planta de cannabis. Si bien hay diferencias notorias con los talleres de reducción de daños en cuanto a su formato –no había una sistematización de los intercambios en publicaciones, ni financiamiento externo para su realización–, lo cierto es que en estos espacios las personas usuarias y cultivadoras eran las protagonistas, sus saberes eran cruciales para estructurar la dinámica de los encuentros y se procuraba en todos los casos orientar prácticas que maximizaran el bienestar de los sujetos. Asimismo, allí también circulaba información legal respecto de las actividades sobre las que se conversaba y se hacía una historización del prohibicionismo como contexto global que enmarcaba la penalización de las conductas asociadas a las drogas, con lo que el cultivo se transformaba en una acción de resistencia. Además, el horizonte de estas actividades, definidas por un activista como *compartir la información y la semilla* era, precisamente, sortear la peligrosidad de los circuitos del narcotráfico a través de la producción propia de inflorescencias y derivados para garantizar la calidad de lo que se utilizaba y la autosuficiencia. En el marco de los dispositivos solidarios de atención y cuidado que algunas organizaciones sociales cannábicas implementaron para atender la creciente demanda social, el taller de cultivo constituyó uno de los módulos en los que podían participar los nuevos usuarios terapéuticos.

Cabe destacar que las iniciativas educativas y el objetivo de brindar información confiable desde las organizaciones sociales excedían el espacio de los talleres y atravesaban otras acciones promovidas desde las agrupaciones. Así, por ejemplo, en las concentraciones previas o posteriores a las marchas anuales se ponían a disposición *stands* con folletería y materiales de reducción de daños. Durante 2016, cuando se discutía la regulación del uso terapéutico en el Congreso de la Nación, las asociaciones

organizaron reuniones científicas y seminarios de *cannabis medicinal* en los que los conocimientos de las personas cultivadoras adquirieron un matiz especializado, acercándose a los ámbitos científicos y médicos (Díaz, 2019).

Produciendo conocimientos cannábicos desde las universidades

Con la demanda de acceso al cannabis para uso terapéutico y sobre todo luego de la aprobación de la Ley N° 27350 de Investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, en marzo de 2017, se conformaron agrupaciones cuya composición y formas de denominación referenciaban la dimensión profesional en torno al tema (Díaz, et al., 2021). El desarrollo de un activismo científico por parte de docentes e investigadores que se desempeñaban en las universidades se produjo en un primer momento en asociación con organizaciones sociales en acciones de divulgación y, luego, ya en el ámbito universitario, a través de actividades extensionistas, como también de módulos o seminarios de grado y cursos de posgrado en los que se proponía abordar la evidencia científica disponible.

La extensión universitaria instaló la problemática del acceso en condiciones seguras en el ámbito universitario, dándose las primeras vinculaciones entre investigadores que tenían acceso a equipos que permitían la caracterización de muestras y activistas y usuarios que querían conocer la composición de los preparados que estaban utilizando en sus tratamientos. Así ocurrió, por ejemplo, en el caso de investigadores del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente –dependiente de Conicet y de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata–, que se desempeñaban en un proyecto de extensión enfocado en la cuestión ambiental y que empezaron a recibir consultas respecto de los aceites por parte de organizaciones sociales y del área cuidados paliativos de un hospital. Esto condujo a que presentaran un proyecto de extensión enfocado en cannabis que favorecía la articulación con profesionales de la salud y con personas usuarias y cultivadoras; luego, participaron en el marco de una cátedra libre y crearon un cultivo universitario con variedades provistas por asociaciones civiles cannábicas (Romero & Aguilar, 2020; Salas Adotti et al, 2019). Tal forma de vinculación en esa y otras universidades dio pie al surgimiento de un tipo de servicio que estas instituciones podían prestarle a la comunidad.

La Universidad Nacional de La Plata también fue sede del primer curso de posgrado en endocannabinología, ofrecido por la Facultad de

Ciencias Médicas en 2017 ante la gran demanda, por parte de las organizaciones de la sociedad civil, de médicos que pudieran acompañar a las personas usuarias en sus tratamientos, y frente la ausencia de trayectos de formación específicos en este tipo de terapéutica. En el escenario incierto que se abría con la reciente aprobación de la ley, las clases, frecuentadas por profesionales de todo el país, se volvieron espacios propicios para discutir y reflexionar sobre lo que todavía desconocían, tanto en términos de la evidencia clínica, como en los impactos que tendría la legislación en la propia práctica médica:

La gran parte de los disertantes reconocían desconocimiento. Entonces, un poco entre todos acá vamos: ‘bueno, entonces funciona de esta forma, hay que tener estas precauciones, los productos tendrían que tener estos estándares de calidad, podrían ser las universidades las que nos den los cromatógrafos, para estas indicaciones’, o sea, [...] generábamos como una forma de reducir daños en aquel escenario de capacitación. (Entrevista personal, 17 de marzo de 2025)

También durante esos primeros años, en la Universidad Nacional de La Pampa un profesor y activista impulsó la creación de la cátedra libre Abordaje Interdisciplinario del Cannabis, logrando su aprobación en 2019. El principal objetivo de este espacio era brindarle fundamentos científicos y datos sobre el uso local de la planta al gobierno provincial para, de ese modo, incidir en las futuras decisiones políticas sobre cannabis, especialmente en el desarrollo de una industria cannábica provincial y regional (Oliveto, 2022). Historias similares en cuanto a la articulación de actores sociales se produjeron en otras coordenadas: en la Universidad Nacional de Mar del Plata, por ejemplo, la Cátedra Abierta de abordaje transdisciplinario de los usos de Cannabis y sus derivados, creada en 2021, emergió de actividades previas de colaboración entre activistas e investigadores; en la Universidad Nacional de Córdoba, los cursos de formación en extensión dictados desde 2022 incluyeron entre sus docentes a activistas cannábicos que dictaban clases, en las que sus formas de cultivo y de organización eran objeto de descripción y análisis.⁴

4 Se trata de los cursos “Cannabis: producción, usos terapéuticos y derechos humanos” (2022) y “Producción sostenible de cannabis” (2023; 2024), fruto de la articulación entre la Secretaría de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Libre del Ambiente (ULA), dependiente de la Municipalidad de Córdoba, y la Asociación Civil Cogollos Córdoba. Participé en estas instancias como integrante del equipo coordinador.

Lo cierto es que la oferta de capacitaciones se multiplicó en distintas casas de estudio a lo largo y ancho del país luego de la segunda reglamentación de la ley, mediante el decreto N° 883 de 2020 que, entre otras medidas, mencionaba de manera expresa a las universidades como actores implicados. Un relevamiento preliminar constata que desde hace diez años se han desarrollado por lo menos setenta iniciativas educativas sobre cannabis en las universidades nacionales, siendo más abundante la oferta académica que trata el tema desde un enfoque de salud en diplomaturas, cursos de posgrado y de extensión; de ese total, veintiún espacios cuentan con asociaciones civiles cannábicas entre sus organizadores e impulsores.⁵

Entre ellos, podemos mencionar el caso del curso de posgrado “Abordaje integral de la planta de cannabis para la salud”, dictado desde la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario desde 2021 y diseñado desde la Asociación de Usuarios y Profesionales para el Abordaje del Cannabis y otras drogas (AUPAC), como una derivación de instancias de formación previas.⁶ De talleres de corta duración –de cultivo, extracción, dosificación– se pasó a un curso propio de 40 horas en 2020, diseñado para formar profesionales que pudieran atender el gran volumen de consultas de personas usuarias, y luego a un curso de posgrado de 130 horas al año siguiente. La estructura de módulos de este último, al igual que en los casos anteriores, daba importancia a la contextualización histórica sobre uso de sustancias psicoactivantes y prohibicionismo. Con ese posgrado surgió la posibilidad de llegar a otras instituciones:

Tuvimos muy buena repercusión, y de ahí se abren un montón de otras aristas federales para la capacitación en distintas universidades que también involucren a cannabis, así como otros estratos de capacitación, sea a través de distintos ministerios provinciales de salud o secretarías de calidad de vida o de diversidad o de, digamos, se [nos] ha llamado a capacitar de distintas localidades y con distintas formas. Porque ha sido la herramienta que ha permitido que esta ley hoy no solamente siga en pie, sino que se enraíce con profundidad. (Entrevista personal, 12 de marzo de 2024).

5 Si bien se crearon espacios curriculares sobre cannabis en la enseñanza superior en otras latitudes (Ware & Zemianski, 2015; Reid et al., 2021), en el caso argentino esta participación de la sociedad civil les ha otorgado un carácter particular. De los veintiún casos mencionados, se repiten los nombres de algunas organizaciones que lograron articulaciones exitosas con distintas casas de estudio. Este tema actualmente es objeto de indagación en el marco de un proyecto de extensión recientemente aprobado.

6 Se puede leer más sobre esta experiencia en el capítulo “Abordaje integral...”, de este libro.

En espacios de creación más reciente, como la Diplomatura de Extensión Universitaria de Cannabis Medicinal de la Universidad Nacional de Salta, dictada en 2024, si bien las asociaciones no participaron como organizadoras, sí fueron una parte primordial de sus condiciones de emergencia. Esto, porque fue la consulta de integrantes de organizaciones de la sociedad civil que querían conocer la calidad de sus preparados de cannabis lo que motivó a una investigadora local a capacitarse y luego a diseñar la diplomatura. El formato elegido respondía a los nuevos requisitos planteados por el Ministerio de Salud, que con la resolución N° 3132 de 2024 exigía a los profesionales de la salud acreditar “una Diplomatura o Maestría en el uso medicinal de la planta de Cannabis Medicinal” (sic). Y también a la necesidad de habilitar el cursado a personas que no tenían títulos de grado o habían transitado por la educación superior, y que estaban dando respuesta a la demanda de derivados a partir de sus conocimientos empíricos, es decir, de lo que habían aprendido en la experiencia:

La mayoría de los que se dedican a la elaboración de los aceites lo hacen de manera artesanal, no tienen ninguna formación, pero tienen el conocimiento de la práctica. Y por ahí nosotros, que teníamos toda la formación científica, no tenemos los conocimientos prácticos. Entonces fue muy enriquecedor el intercambio en la práctica de los laboratorios y en las determinaciones también de los cannabinoides. (Entrevista personal, 14 de marzo de 2025)

Comentarios finales

A medida que se creaban las experiencias educativas descritas, se iban transformando las medidas regulatorias en torno al cannabis, manteniéndose vigente la ley de drogas que penaliza a personas usuarias y cultivadoras. Así, después de la ley de cannabis medicinal se aprobó en 2022 una norma que apuntaba a la industrialización de la planta para uso medicinal e industrial. Más allá de la implementación efectiva de la legislación, llamamos la atención sobre el desarrollo de políticas cannábicas no solo de alcance nacional, sino también provincial y municipal, impulsadas por acciones de incidencia de las organizaciones sociales, entre otros actores mencionados, además de la injerencia de los decisores políticos.

Las capacitaciones reseñadas constituyen dispositivos que forman a sus participantes en ciertas técnicas, procedimientos y repertorios de actuación con relación a las sustancias ilegalizadas y, más

específicamente, al cannabis; y que, al mismo tiempo, también habilitan un reposicionamiento de estos como *usuarios, agentes de salud, promotores comunitarios, cannabicultores, profesionales y especialistas*. Un elemento en común que podemos observar es la influencia de las personas usuarias y cultivadoras como detentoras de saberes particulares, cercanos a sus vivencias y experiencias, a menudo producidos por fuera de instituciones educativas formales. Y, además, destacamos el surgimiento de un conocimiento ensamblado, fruto del intercambio no exento de disensos y tensiones entre estudiantes y quienes imparten o coordinan los espacios de formación.

El paradigma de reducción de daños atraviesa estas intervenciones, en tanto las acciones fueron cada vez más pensadas como formas de disminuir los perjuicios generados por la prohibición que pesa sobre el uso no farmacológico o medicalizado de las drogas. El rasgo de propagación que apareció en el registro de los primeros talleres también se hizo presente en la oferta educativa superior en torno a la planta, que se desprendió de otros trayectos de formación o del recorrido que investigadores e investigadoras realizaron junto al movimiento cannábico. En los talleres y cursos se articulan los aspectos de investigación, intervención e incidencia, presentes en la conformación de las organizaciones sociales de reducción de daños, y luego también en las asociaciones cannábicas y en los grupos de estudio universitarios.

Hasta aquí consideramos de manera conjunta una serie de capacitaciones, enfocando sus contextos de surgimiento y desarrollo, y la particular trama que reunió a los actores que las llevaron a cabo. A pesar de que resulta visible –y puede parecer hasta obvio– el hecho de que en los mundos antiprohibicionistas y cannábicos la educación sea considerada un elemento fundamental para el cambio político y social, interesa observar detenidamente qué discursos, trayectorias y formas de organización colectiva se configuran a la luz de acciones como las abordadas, y cómo se despliega la creencia en el potencial transformador de las propias prácticas cuando éstas adquieren una dimensión pedagógica.

Referencias

- Camarotti, A. C. (2011). *Política sobre drogas en Argentina. Disputas e implicancias de los programas de supresión del uso y de reducción de daños*. Saarbrücken: Lambert A.P.
- Corbelle, F. (2016). *Dar la cara como "usuario responsable". El activismo político de los usuarios de drogas: de la clandestinidad al Congreso Nacional*. Tesis de Doctorado en Antropología, Universidad de Buenos Aires.
- Díaz, M. C. (2019). *Cultivar a vida: uma etnografia entre ativistas cannábicos na Argentina*. Tesis de Doctorado en Antropología, Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mimeo.
- Díaz, M. C., Aguilar, O., Romero, L. (2021). Coproducción de activismos, experticias y redes en la regulación del cannabis medicinal en Argentina. *Ucronías* n. 4, p. 95-118.
- Díaz, M. C. (2023). Un recorrido panorámico por iniciativas educativas sobre cannabis en Argentina. *Mediações. Revista de Ciências Sociais*, v. 28 n. 3, 1-18.
- Epele, M. E. & Pecheny, M. (2007). Harm reduction policies in Argentina: A critical view. *Global Public Health*, Oct. 2007; 2(4): 342-358.
- Galante, A.; Rossi, D; Goltzman, P. y Pawlowicz, M. P. (2009). Programas de Reducción de Daños en el Escenario Actual. Un cambio de perspectiva. *Revista Escenarios*, (14) 113-121.
- Goltzman, P. (2004). *Entrenamiento de Operadores/Promotores de Reducción de daños. Diario de una experiencia*. Buenos Aires: Intercambios Asociación Civil.
- Hurtado, G. (2002). Prefacio. En Inchaurreaga, S.; Escudero, M.; Trincheri, N.; Siri, P.; Coronel, M.; Rodríguez, M. Michelli, E.; Trincheri, R. *Drogas: Haciendo posible lo imposible. Experiencia de reducción de daños en Argentina* (pp. 15-21). Rosario: CEADS-UNR/ARDA.
- Inchaurreaga, S.; Escudero, M.; Trincheri, N.; Siri, P.; Coronel, M.; Rodríguez, M. Michelli, E.; Trincheri, R. (2002). *Drogas: Haciendo posible lo imposible. Experiencia de reducción de daños en Argentina*. Rosario: CEADS-UNR/ARDA.
- Kornblit, A. L.; Mendes, A. M.; Camarotti, A. C.; Federico, A. (2002). Consumo de drogas y conductas sexuales en una muestra de adictos por vía endovenosa de Buenos Aires. *Adicciones*, vol. 14, n. 1, p. 79-85.
- Labiano, V. I. (2020). La difusión de las políticas de cannabis medicinal en América Latina (2015-2017). *Revista De Estudios Sociales De La Ciencia Y La Tecnología*, vol. 26, n. 50, p. 147-179.
- Manzano, V. (2017). Drogas y política en la Argentina de los ochenta *Revista SAAP*. Publicación de Ciencia Política de la Sociedad Argentina de Análisis Político, vol. 11, núm. 2, noviembre, 2017, pp. 313-338.
- Oliveto, D. (2025). *Cannabis Medicinal en La Pampa: pasado, presente y futuro. Una recopilación del material producido por la cátedra libre "Abordaje Interdisciplinario del Cannabis" de la UNLPam*. Mimeo.
- Reid, A. E.; Crump, Micah E. S; Clement, Vikiana R.; Rolle, J. D. (2021). Introducing cannabis education on a college Campus in 2021. The case of Medgar Evers College. *International Journal of Higher Education Management (IJHEM)*, v. 8 n. 2, 36-53.

- Rhodes, T., & Hedrich, D. (2010). *Harm Reduction: Evidence, Impacts and Challenges*. Luxemburgo: Office of European Union.
- Rivera Vélez, L. (2019). Mothers as Pot Legalizers: From Illegality to Morality in Medical Use of Cannabis in Latin America. En Polese, A. Russo, A. y Strazzari, F. (Eds) *Governance Beyond the Law* (pp. 85-103). Palgrave Macmillan.
- Romero, L. A., & Aguilar, Ó. (2020). Interacciones entre cultivadores, usuarios y académicos en torno al cannabis terapéutico en Argentina. *Redes* v. 26, n. 50, p. 235–263.
- Salas Adotti, D.; Cabrera, J.; Colmeiro, M.; Bugvila, C.; Marchesini, A.; Vaccarini, C.; Cima, J.; Malaissi, L.; Williman, M.; Brunetti, A.; García, V.; Andrinolo, D. (2019). Cannabis y Extensión: derribando fronteras del prohibicionismo y acercando conocimientos de organizaciones sociales a la universidad. Ponencia presentada en las Jornadas de Jovens Pesquisadores, Universidade Federal de São Carlos, Brasil.
- Ware, M. A. & Ziemianski, D. (2015). Medical education on cannabis and cannabinoids: perspectives, challenges and opportunities. *Clinical Pharmacology & Therapeutics* v. 97 n. 6, 548-550.